

cuchillo, con cuya consignacion cree el quejoso vulnciadas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 5º, 16, 19, y 20 de la Constitucion federal; y considerando: que en el expediente aparece, que Lucero fué consignado contra su voluntad al servicio militar por reputársele desertor de la guardia nacional: que así por la declaracion de los testigos presentados por el quejoso, como por la boleta respectiva que obra en el expediente, consta que Lucero no puede ser tenido como desertor de guardia Nacional, porque está exceptuado de servir en ella: que si bien su consignacion á servir en el ejército de linea, no puede decirse un ataque á las garantías á que se refieren los artículos 16, 19 y 20 de la Constitucion federal, no sucede lo mismo respecto de la á que se refiere el art. 5º de la misma Constitucion; por lo expuesto y de conformidad con lo que se previene en el art. 101. se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio en 22 de Abril último por el Juez de Distrito de Puebla en la parte que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José de Jesus Lucero, por haber sido destinado contra su voluntad al servicio de las armas por la Gefatura Política de esa Ciudad, con violacion del art. 5º de la Constitucion.—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias, —Pedro Ogazon. —Juan J. de la Garza. —J. M. Lozano. —José Arteaga. —Pedro Ordaz. —Ignacio Ramirez. —M. Castañeda y Nájera. —J. M. del Castillo Velasco. —M. Auza. —Simon Guzman. —Luis Velasquez. —M. Zavala. —Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México. Mayo 26 de 73.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por D. José C. Valadéz, contra el C. Gobernador de ese Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor fiscal dice: D. José C. Valadéz, se ha presentado ante V. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Prefecto del Distrito, que en virtud de disposiciones administrativas del C. Gobernador del Estado, ha impuesto á dicho Valadéz la pena de un año de prision por infraccion contra la ley orgánica de los artículos 6 y 7 de la Constitucion general. El quejoso funda su recurso en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. El Sr. Valadéz, hace mérito de que se le ha procesado administrativamente por delito de falsedad, porque se han calificado sus escritos como suversivos y por que se le há impuesto la pena de prision sin dejarle la opcion á escojer la pena pecunaria en lugar de la corporal, en los términos del artículo 42 de la ley de imprenta, violándose así en su persona las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitucion federal; y contra lo que dispone el 21, sobre las facultades que para imponer penas, que propiamente no lo son, concede á la autoridad política ó administrativa el referido artículo. Agrégase tambien, que puesto que se le ha formado un verdadero proceso atribuyéndole delitos de falsedad y contra el órden público sin oírle en defensa, se ha violado tambien la garantía que concede el artículo 20 en su fraccion 5ª, pide la previa suspension del acto reclamado.

Ese juzgado dictó desde luego la suspension, porque la creyó procedente, y para sustanciar el recurso pidió á la autoridad ejecutiva el informe que previene la ley. En este informe que rinde el Gobierno y no la Perfectura, se asienta: que con fundamento

de los artículos 34 y 42 de la ley de imprenta, ejerciendo las facultades políticas ó administrativas que corresponden al Gobernador del Estado; y en virtud de resultar probadas las infracciones á la ley del ramo por no aparecer firma en los artículos de "La Tarantula" de que es editor Valadéz, y que se publica en la imprenta de que es dueño, se habia impuesto la pena de un año de prision *no creyendo que pueda ser materia de duda, que el señalamiento de la pena pecuniaria ó corporal, depende exclusivamente, en cuanto á su aplicacion de la eleccion de la autoridad que la impone y que la opcion no pertenece al penado, sino en el caso de que se le conceda por una mera gracia, opcion de que no puede hacer uso el C. Valadéz, por la imposibilidad notoria en que se encuentra de satisfacer la pena pecuniaria; y que las consideraciones ó apreciaciones que se hacen en el acto del juicio administrativo, no deben tomarse como el móvil de la autoridad sino como simples incidentes; siendo el objeto esclusivo de dicho juicio, la imposicion de la pena correspondiente por la infraccion de los artículos 34 y 42 de la ley de imprenta.*

En concepto del Fiscal, dos son aquí los puntos que deben examinarse para resolver con acierto en el presente caso: ¿Es culpable Valadéz, de haber infringido los artículos 34 y 42 de la ley de imprenta, y como tal culpable debe ser castigado conforme al artículo 42? ¿La opcion entre la pena pecuniaria y la corporal, toca al Gobernador ó al culpable? Parece que sí es culpable, tanto porque él mismo no lo niega, como por que así aparece justificado de la acta administrativa que corre en copia. Debe pues aplicársele ó la pena de prision, ó la pecuniaria que el mismo artículo establece; mas como en ella no se determina á quien corresponde la eleccion entre una y otra pena; mas bien, como no se dice expresamente que esa eleccion sea, de la autoridad, es evidente, conforme á los principios generales de derecho y contra la que asienta el Gobierno,

que la eleccion compete al penado á cuyo favor en caso de duda debe resolverse siempre, sin que obste la carencia notoria de recursos de Valadéz, pues acaso podría proporcionarlos sin tenerlos.

Mas ocurre otra cuestion: el artículo 21 de la Constitucion general, dispone terminantemente: que las penas propiamente tales (y lo es sin duda una que se impusiera por un año de prision) no pueden aplicarse sino por la autoridad judicial; y que la política ó administrativa, solo podia imponer como correccion hasta \$500 de multa ó hasta un mes de reclusion. Es pues singular que contra el artículo constitucional citado, la ley de imprenta, que como orgánica de los artículos 6 y 7 no es mas que una emanacion de aquella, venga imponiendo una pena que en ningun caso concede su aplicacion, como correccional, á la autoridad política ó administrativa. El Fiscal ha abrigado la creencia que podia ser un error de imprenta; que no cabe duda que el artículo 42 de la ley publicada sobre su libertad, dice textualmente un año de prision y esto lo ha creído, porque no ha tenido á la vista sino la edicion que de esa ley se ha hecho en el Estado. Mas en todo caso, como nunca una ley secundaria puede subsistir en aquello que sea diverso ó contrario á la Constitucion, no puede caber duda, que las facultades administrativas ó económicas de las autoridades políticas para imponer penas que propiamente no lo son, ó llámense correccionales, nunca pueden estenderse á mas de los \$500 de multa ó el mes de reclusion que prescribe el artículo 21 de la Constitucion, y nunca al año de prision que se lee en el artículo 42 de la ley de 4 de Febrero de 1868.

Por todo lo expuesto y con los fundamentos dichos, el fiscal concluye pidiendo que se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. José C. Valadéz, contra la resolucion administrativa del Gobierno del Estado, en cuanto á que le ha impuesto una pena de mas de un mes de reclusion ó \$500

de multa, contra lo que expresamente determina el artículo 21 de la Constitución general de la República; así como por haberle privado de elegir entre la pena pecuniaria ó la corporal.—Mazatlan, Mayo 22 de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Mayo 2 de 1873.—Visto el juicio de amparo que el C. José C. Valadéz promovió el 24 de Febrero próximo pasado, contra la providencia del C. gobernador del Estado, en que por medio de un procedimiento administrativo aclaró, que algunos números del periódico "La Tarántula" eran anónimos, porque los que aparecían como editores negaron su responsabilidad: que el verdadero editor y dueño de la imprenta, era el C. José C. Valadéz, cuyo nombre tampoco figuraba con tal caracter en el periódico, y haciendo uso de la facultad gubernativa que concede el artículo 42 de la ley de imprenta, orgánica de los artículos 69 y 79 de la Constitución, con fundamento del propio artículo y del 34, impuso al C. Valadéz un año de prision. Vista la queja del C. Valadéz fundándose en la fracción 1ª artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, que cree violada en su persona la garantía que concede el artículo 16 de la Constitución federal, dando por razon que se le formó un proceso administrativo criminal, por delito de falsedad, haciéndose apreciaciones sobre publicacion de los artículos relativos con la paz pública y la vida privada, para todo lo que considera incompetente al C. Gobernador. Visto el informe rendido por la Prefectura, que consiste simplemente en la instruccion literal que para el caso le dió el propio gobierno, sin otra justificacion que la resolucion administrativa y los artículos 34 y 42 de la ley de imprenta de 4 de Febrero de 1868. Visto por último, el pedimento fiscal y los alegatos y fundamentos principales de una

y otra parte, en que convienen justamente en la culpabilidad del C. Valadéz, que en vista del artículo 42 de la ley de imprenta, considera legal la aplicacion de la pena de prision ó pecuniaria, dejando la eleccion de una de estas al responsable, conforme á los principios generales de derecho, y todo lo demas que ver convino.—Considerando: Que el gobierno no le oyó su defensa al C. Valadéz conforme al artículo 20 fraccion 5ª de la Constitución: que segun el artículo 21 de la misma, la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial, y la política ó administrativa solo puede imponer como correccion, hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusion, en los casos que determina la ley: que tanto la Prefectura como el Gobierno, tuvieron á la vista lo alegado por el C. Valadéz, é hicieron punto omiso sobre el fundamento del artículo 21 de la Constitución: que es indudable que el artículo 42 de la ley de imprenta, concede facultad gubernativa para castigar la omision en los impresos, de los requisitos que se señalan en aquel y en el artículo 34, y de consiguiente, el gobierno del Estado, como autoridad política, ejerció su derecho al averiguar y descubrir que en varios números del periódico "La Tarántula," faltaba un verdadero responsable y aun el nombre del dueño de la imprenta: que el gobierno ha usado de una facultad legal en el procedimiento administrativo; y en esto no se han violado los artículos 16 y 20 de la Constitución federal: que si bien el gobierno impuso un año de prision conforme á la letra del artículo 42 de la ley de imprenta; pero la Constitución de la República que es la ley suprema, en su artículo 21 dice terminantemente, que la autoridad política ó administrativa, solo podrá imponer como correccion hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusion, y en el caso de aplicarse alguna de estas disposiciones, es incuestionable que corresponda la preferencia á la ley fundamental, conforme á los

principios del derecho público y constitucional: que de lo dicho se viene en conocimiento, que si el gobierno en su resolución gubernativa, hubiera corregido la falta del C. Valadéz con un mes en lugar de un año de reclusión, no procedería el amparo solicitado; pero al imponer un año en lugar de un mes, la garantía constitucional quedó violada: que en mérito de los fundamentos sentados, y teniendo presente los artículos 21, 101 y 102 de la Constitución federal, y fracción 1ª artículo 19 y demás relativos de la ley de 20 de Enero de 1869, y de conformidad en la opinión del C. Asesor y lo pedido por el C. Promotor fiscal, fallo con las siguientes proposiciones: Primeras: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. José C. Valadéz, contra la resolución administrativa del gobierno del Estado, en cuanto á que se le ha impuesto una pena de mas de un mes de reclusión, contra lo expresamente determinado en el artículo 21 de la Constitución general de la República. Segundas: notifíquese, advirtiéndole al C. Valadéz la obligación que tiene de reponer el papel del sello correspondiente, mandando copias para su publicación al boletín oficial del Estado y al Semanario Judicial, y remitiendo los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. El primer suplente del Juzgado de Distrito del Estado en ejercicio, C. Maximino Barragan, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó por ante mí.—Doy fé.—*Maximino Barragan*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Mayo 15 de 1873.
—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 13 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. José Valadéz, contra el Gobernador del Estado, quien

calificando por sí, que el periódico la "Tarántula" que se publica en la imprenta de Valadéz, es anónimo; que asimismo Valadéz es reo de falsedad; que los artículos de dicho periódico, no tienen la firma de su autor; que en él no se expresa el nombre del dueño de la imprenta en que se publica; que se ha hecho notable, por la violencia en los ataques á las autoridades, y á muchas personas particulares, calumniándolas, insultándolas, sembrando la discordia, conservando la agitación de los ánimos en permanente inquietud; incitando á la perturbación del orden, por medio de artículos subversivos, y entrando en el terreno de la vida privada; y quien haciendo otras apreciaciones respecto del mismo periódico, ha impuesto al quejoso la pena de un año de prisión, sin dejarle libertad para escoger, entre la prisión ó el pago de una multa; con cuyos actos, se han vulnerado en su persona, las garantías á que se refieren los artículos 16 y 20 en su fracción 5ª, y 21 de la Constitución federal; y Considerando: que la mayor parte de los motivos que el Gobernador de Sinaloa expone para imponer á Valadéz la pena de un año de prisión, es relativa á abusos de libertad de imprenta; que con arreglo á la última parte del artículo 79 de la Constitución federal, los delitos de imprenta deben juzgarse por jueces de hecho y de derecho: que juzgar acerca de ellos otra autoridad, importa un ataque á la garantía á que se refiere el artículo 14 de la misma Constitución, así como imponer alguna pena por delitos de imprenta otra autoridad que no sea el jurado de derecho, es también un ataque á la garantía á que se refiere el artículo 21 de la propia Constitución. Por lo expuesto, y de conformidad con lo que se previene en el artículo 101, se decreta: Que se reforma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 2 de Mayo del presente año, por el Juez de Distrito de Sinaloa, y se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. José Valadéz contra el acto del Gobernador del Estado, que le im-

puso como pena un año de prision. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 13 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Angel Torres, contra el Gefe político de esa Capital que redujo á prision á Angel, por no tener boleta de Guardia Nacional.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Mayo 8 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por Ignacia Torres á nombre de su hijo Angel del mismo apellido, contra el C. Gefe político, por haberlo mandado poner en prision al no hacer el pago de la cantidad de dos pesos veinticinco centavos que se le exijan como robajado para servir en la Guardia Nacional, cuyo procedimiento importa violacion de las garantías individuales; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable y el producido por el C. Juez menor en turno, con cuanto mas que ha sido de verse,

Considerando: que no ha designádoso la garantía individual que halla violádose, de conformidad á lo dispuesto por el artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869; que negado el hecho por el C. Gefe político, ha debido acreditarse, y al no hacerse, resulta que no ha justificado el acto reclamado; que si bien es cierto que el quejoso fue sentenciado á la limpieza, esto no lo hizo el C. Gefe político, sino el C. Juez menor en turno por faltas á la policia, segun aparece en su informe. Por estas consideraciones y por no estar comprendido el caso en lo determinado por el artículo 1º de la expresada ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que no ha lugar el que se conceda el amparo que se solicita de la Justicia de la Union, por el C. Angel Torres, y que por ser notoria su insolvencia no se le condena á que pague cantidad alguna de multa.

Hágase saber, y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision y copias de este fallo á la direccion del Periódico Oficial del Estado, y Semanario Judicial de la Federacion.

El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero*. Ante mí.—*Antonio G. Mozqueira*.

Es copia que certifico y se saca en cumplimiento de lo mandado, para su insercion en el Semanario Judicial.

Puebla, Mayo 9 de 1873.—*Antonio G. Mozqueira*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Ignacia Torres por su hijo Angel Torres, contra el Gefe político de Puebla, quien segun la quejosa redujo á prision á su hijo, por no tener boleta de Guardia Nacional; y apareciendo en el expediente que Angel Torres fué sentenciado á ocho dias de lim-